

**JORGE ROMERO HERRERA**

Expropiaciones, riesgo inminente para las inversiones

El Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage mide cada año el clima de negocios y seguridad para los derechos de propiedad y apego al estado de derecho. En su edición de 2023, ubica a México en el lugar 61, con 63 puntos; la calificación más baja desde 2018. Entre las 32 naciones de la región, nuestro país tiene el lugar décimo primero. Estas calificaciones definen a la economía mexicana como moderadamente libre, es decir una libertad mediocre y, en los hechos, frágil.

En el Índice se señala que el estado de derecho en México ha sido socavado severamente por la violencia y la inestabilidad relacionada con el tráfico de estupefacientes. Otra grave debilidad institucional, se identifica por una corrupción sin freno y una muy endeble protección a los derechos de propiedad priva-

da. Asimismo, se señala que las políticas estatistas en materia de energía y recursos naturales amenazan a la inversión extranjera y violan el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.

En este entorno, resulta relevante señalar que el actual gobierno también se ha caracterizado por tomar determinaciones caprichosas y muchas veces carente de fundamentos técnicos en materia económica. Lo anterior incluye un reflejo populista que no escatima la amenaza de recurrir a expropiaciones, como lo vimos hace un par de semanas en el caso del ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec. En dicho evento, fuimos testigos de la impaciencia del presidente en hacer su voluntad para apoderarse de ciertos tramos de vías conforme sus intereses y visión unipersonal. El Presidente optó



Estas decisiones políticas para realizar expropiaciones han sido calificadas por expertos como la peor amenaza para la estabilidad y el crecimiento de México.

por ubicarse ante el concesionario, con una postura de fuerza y mandando un mensaje claro a terceros sobre las consecuencias de no plegarse a sus dictados.

De acuerdo con su propia información, hasta ahora se han emitido 32 decretos expropiatorios relacionados con el Tren Maya, con el objetivo de adueñarse de mil 941 hectáreas en el estado de Quintana Roo. Estas decisiones políticas han sido calificadas por expertos como la peor amenaza para la estabilidad y el crecimiento de México.

La toma de las instalaciones de Ferrosur por parte de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar), basado en la necesidad de tener control y administración de todas las líneas ferroviarias del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec—zona estratégica para el transporte—, pone en evidencia el mal uso que se está haciendo de

nuestras fuerzas armadas, quienes asumen los costos y las responsabilidades de estas acciones, al convertirse en operadores de los caprichos presidenciales.

Estas acciones, que reflejan el creciente carácter hostil y autoritario que ha tomado el gobierno, representan una pésima señal para el mundo y debilitarán más nuestra imagen internacional como destino de inversión.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos encontramos comprometidos con un país en que el clima de libertades económicas crezca y se consolide como una de las grandes ventajas de nuestro país. Buscamos que se generen oportunidades para todos, con base en la educación, la ciencia, la tecnología y la competitividad. Y que los motores de la economía sean la certeza jurídica y el estado de derecho. ●

Diputado, Coordinador del GPPAN